



ICEI Instituto Complutense
de Estudios Internacionales

América Latina. Democracia, Pobreza y Violencia: Viejos y Nuevos Actores

Dirk Kruijt
WP 04/06

Resumen

La violencia política que caracterizó a los regímenes autoritarios y los conflictos armados presentes en América Latina en las décadas de los setenta y los ochenta ha dado paso a nuevos tipos de violencia social. Entre sus principales causas se encuentra la creciente exclusión social y la marginalidad urbana que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. Los vacíos locales de poder del Estado despejan el camino para los actores armados privados e informales, generalmente asociados al narcotráfico y otras actividades ilícitas, que ocuparán el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos de desintegración, dominio de criminales, del terror y el miedo. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático y los perímetros de la ciudadanía, y se convierte en una de las amenazas más graves a la consolidación democrática de la región.

Palabras clave

América Latina, violencia, fuerzas armadas, seguridad ciudadana, exclusión social, narcotráfico, ciudadanía, democracia.

Abstract

The political violence characteristic of authoritarian regimes and the armed conflicts present in Latin America in the seventies and the eighties has give way to new types of social violence. This new violence is caused, among other factors, by the growing social exclusion and urban marginality that is characteristic of Latin American societies. The non-existence of the powers of the State in the local level paves the way for private and non-formal armed actors, usually linked to drug trafficking and other illicit activities. These actors take the place of the police and justice, transforming the poor and marginalized neighbourhoods into places of disintegration, and provinces of crime, fear and terror. The phenomenon of exclusion-with-violence shared by the urban poor masses contributes to the destruction of the moral foundations of the democratic order, and the boundaries of citizenship, and became one of the worst threats to democratic consolidation in Latin America.

Key words

Latin America, violence, armed forces, public safety, social exclusion, drug trafficking, citizenship, democracy.

Este documento de trabajo fue presentado por el autor en el Curso de Verano de El Escorial “Conflictos armados y construcción de la paz. El papel de la cooperación al desarrollo”, organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y dirigido por José Antonio Sanahuja. El curso contó con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Algunos de los argumentos y conceptualizaciones de este documento proceden de Koonings y Kruijt (2002, 2004, 2006), Kruijt (2004), Kruijt y Koonings (1999, 2002).

Dirk Kruijt (D.Kruijt@fss.uu.nl) es profesor de estudios del desarrollo en la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Ha sido presidente de la Asociación Neerlandesa de Estudios de América Latina y el Caribe (NALACS), investigador en el Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, y el Institute of Latin America Studies (ILAS) de la Universidad de Londres. Ha sido investigador en las tres sedes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Centroamérica, en el Colegio de México, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y el Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Es miembro del Wissenschaftlichen Beirat des Ibero-Amerikanischen Institut, Berlin. En distintos momentos, ha colaborado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de los Países Bajos. Entre los numerosos libros que ha publicado los más recientes son *Societies of Fear. The Legacy of Violence, Terror and Civil War in Latin America* (coeditado con Kees Koonings), Londres, Zed Books, 1999 (edición española: *Las sociedades del miedo. El legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002); *Informal Citizens. Poverty, Informality and Social Exclusion in Latin America*. (con Carlos Sojo y Rebeca Grynspan), Amsterdam, Rozenberg Publishers, 2002; *Armed Actors. Organised Violence and State Failure in Latin America* (coeditado con Kees Koonings), Londres, Zed Books, 2004; y *Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America* (coeditado con Kees Koonings), Londres, Zed Books, 2006.



El ICEI no comparte necesariamente las opiniones expresadas en este trabajo, que son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Índice

1.	La violencia tradicional : Dictaduras, FFAA y enemigos del Estado	4
2.	La redemocratización y las Fuerzas Armadas	5
3.	Líneas de falla de la democracia latinoamericana	8
4.	Pobreza urbana, desborde popular y la erosión del orden social formal	9
5.	Del desborde popular al desborde de la violencia: Exclusión, inseguridad y violencia	11
6.	Vacíos locales de gobierno	13
7.	Conclusiones	15
	Referencias bibliográficas	17

1. La violencia tradicional: Dictaduras, FFAA y enemigos del Estado

Hasta los años noventa del siglo pasado, quienes analizaban la violencia en América Latina no tenían dificultades sobre de interpretación del papel de los actores principales. La violencia era procedente de actores del Estado, actores que generalmente pertenecían a un conglomerado de organismos nebulosos relacionados con las Fuerzas del Orden, de la Seguridad del Estado y el sistema de Contrainteligencia, y de los servicios oscuros –semi-privados o institucionalizados- asociados a las Fuerzas Armadas y la Policía.

Básicamente la violencia y el terror giraban alrededor de conflictos políticos internos. Eran principalmente los gobiernos militares en las décadas de los sesenta hasta los noventa los que combatían al enemigo del Estado: al comunismo, a la guerrilla y las organizaciones político-militares, a los intelectuales y sacerdotes de la izquierda, a los líderes sindicalistas y campesinos, a los representantes de los maestros y pobladores de los barrios populares, todos aquellos supuestamente opositores beligerantes del régimen. Lo que estos gobiernos generalmente tenían en común era la ideología de la seguridad nacional. Las “guerras internas” y las “luchas contra el terrorismo interno” en América Latina coincidieron mayoritariamente con los gobiernos cívico-militares de Seguridad Nacional durante el período de la Guerra Fría, entonces gobiernos de mano dura y de carácter represivo.

El instrumento de control por excelencia de esos gobiernos fue el conjunto de servicios asociados a su columna vertebral, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden: la inteligencia militar, los servicios paralelos de seguridad del Estado y los cuerpos para-policiales y paramilitares. Durante las décadas de la lucha contra-insurgente y contra-terrorista se expandió el sistema de inteligencia y de seguridad de tal modo que sus nexos oficiales y extra-oficiales fueron difícilmente distinguibles. Inteligencia militar y civil, casi siempre unificadas bajo órdenes del ministerio de la Defensa, fueron dirigidas contra “enemigos internos” dentro del territorio nacional. Inteligencia civil, inteligencia forense e inteligencia de seguridad eran sinónimo de inteligencia militar. También en los gabinetes cívico-militares de aquella época pre-

dominaba la inteligencia castrense, generalmente el cerebro de la dictadura militar (Kruijt, 2001).

Generalmente se había tejido una estructura burocrática de subordinación del sector público a los mandos militares. En algunos países centros militares de altos estudios, como la Escuela de Guerra (ESG) en Brasil, el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en Perú y el Centro de Estabilidad Nacional (Centro ESTNA) en Guatemala funcionaban como academias de entrenamiento ideológico y administrativo para los estamentos superiores castrenses, policiales y ministeriales. Generaciones enteras de burócratas civiles fueron adiestradas en estos centros cívico-militares. Al otro lado, la administración pública y la gerencia de complicados programas de desarrollo regional o sectorial comenzaban a formar parte de la carrera de los oficiales de las fuerzas armadas. Proyectos nacionales de desarrollo eran proyectos nacionales de seguridad. En casi todos los países, con la excepción de Chile, las fuerzas policiales eran supervisadas por oficiales del ejército. El predominio militar sobre las Fuerzas Policiales se expresa por nombramientos de (ex)militares como jefe de cuerpos nacionales de policía, o de (ex)generales como ministro de Gobierno o del Interior. La policía dependía normalmente del análisis de inteligencia militar y no tenía capacidad investigadora en asuntos criminales o forenses.

El crimen organizado era relativamente controlado. Al margen, operaban bandas de la narco-economía, pero se podía detener la violencia de esta economía clandestina relativamente bien. El análisis de la violencia, con otras palabras, podía limitarse al estudio de dos actores: las fuerzas militares y paramilitares y los (supuestos) enemigos del Estado (Bodemer et al., 2001: 189 – 253).

En toda América Latina, sin embargo, las décadas de los años ochenta y noventa fueron el período de la re-introducción de la democracia. En algunos casos (Argentina, Brasil, Chile, Guatemala) esta transición fue acompañada por un largo período de presencia de los militares entre bastidores. Esta presencia velada se manifestó en enlaces personales e institucionales entre el gabinete, el sector público, las instituciones armadas y los servicios de inteligencia y seguridad (Loveman, 1999, Silva, 2000). Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la transición hacia la democracia en América Latina no ha sido el producto de una trayectoria

uniforme. La mayoría de las transiciones necesitaba un periodo relativamente largo, de diez hasta quince años, con avances y retrocesos, actores que aceleraban y otros que obstaculizaban los procesos. Pero, como bien concluye Rojas (2003): la seguridad hemisférica e interna es ahora una competencia de gobiernos civiles y democráticamente electos. Por lo menos parece que, por el momento, los estamentos militares dejaron de pensar en su papel tradicional como árbitro e interventor de la política nacional, en los países del Cono Sur, los países andinos y los centroamericanos (Koonings y Kruijt, 2002, Kruijt y Koonings, 2004).

En situaciones en que antes tal vez se hubiera pensado en presión política o en golpes de estado, hoy sorprende su perfil bajo y su neutralidad frente a acontecimientos políticos internos. Es interesante darse cuenta de que ninguno de los cambios de gobierno habidos por métodos no electorales durante los últimos diez años se realizaron por un golpe o un pronunciamiento militar, sino por movimientos de la “democracia de la calle”: renuncias presidenciales ante movimientos populares espontáneos, movimientos de protesta en los barrios, marchas populares, y huelgas de brazos caídos, transformándose en movimientos políticos, frentes regionales de protesta y organizaciones populares ad hoc. Los cambios presidenciales en Ecuador, por ejemplo, fueron determinados de esta manera, aunque con el apoyo explícito de las fuerzas armadas que se unieron al movimiento popular. En Ecuador tres presidentes fueron expulsados entre el año 2000 y 2005. En Ecuador, el presidente Gutiérrez, tras convulsiones de las masas populares, tuvo que refugiarse en el Brasil en la primavera de 2005. La caída del régimen de Fujimori en Perú fue acompañada y, al final, inducida por varios movimientos civiles de protesta en el año 2000 y 2001. El organizador de las marchas populares, Toledo, fue elegido presidente, para luego tener que enfrentarse con una serie de movimientos de protesta semejantes, organizados en frentes regionales en los años 2002 y 2003. En Venezuela se evidenció el fracaso de la intervención militar para relevar al presidente Chávez ante los movimientos populares que lo llevaron de regreso al Palacio y le han permitido sobrevivir a cuatro huelgas nacionales y a un golpe de estado. A raíz de la evidente crisis económica en la Argentina, a finales de 2001, hubo fuertes enfrentamientos por parte de la población. Sin embargo, se enfrentaron solamente con las fuerzas policiales sin ninguna intervención militar. En medio de grandes dis-

turbios (el presidente De la Rúa tuvo que huir) en un período convulso de quince días hubo cinco presidentes que tomaron el poder y renunciaron, desembocando en la presidencia de Duhalde para complementar el mandato ejecutivo vacante (Camou, 2002: 26-27). En el año 2004 el presidente haitiano Aristide desapareció (o fue desaparecido) en un avión rumbo al exilio africano. En octubre de 2003, fueron los cocaleros bolivianos quienes lideraron el movimiento nacional de protesta contra el presidente Sánchez de Lozada, situación que fue solucionada cuando el vicepresidente Meza asumió las funciones de la presidencia. En el verano de 2005 también este presidente renunció en medio de disturbios prolongados dominados por la “democracia de la calle”. El triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS), que llevó al presidente Morales al poder en las elecciones de diciembre de 2005, fue antecedido –y en cierto sentido es el sucesor legítimo– de una serie de movimientos sociales que confrontaron el gobierno de turno sistemáticamente (Crabtree, 2005).

2. La redemocratización y las Fuerzas Armadas

Con el avance de la democracia se re-enfaticó de nuevo el papel de la policía y se limitó paralelamente la influencia de los servicios de inteligencia. En Argentina, las fuerzas armadas dejaron el gobierno desprestigiado después de la derrota en la guerra de las Malvinas, que significó al mismo tiempo el fracaso del gobierno militar (McSherry, 1997). Se reorganizó alrededor del año 2000 el sistema de inteligencia militar y de la policía (Saín, 2002, 2003), reequipando la policía con inteligencia forense e informática sobre asuntos como la narco-economía, la criminalidad, el lavado de dinero y el terrorismo. La presencia política de las instituciones armadas argentinas se ha reducido visiblemente. A raíz de la evidente crisis económica en la Argentina, a finales de 2001, hubo fuertes enfrentamientos por parte de la población. Sin embargo, se enfrentaron solamente con las fuerzas policiales sin ninguna intervención militar.

En el caso del Brasil había una transición lenta pero estable que empezó en 1985 con la presidencia de Sarney y que llegó a su fin en 1998, cuando el presidente Cardoso reorganizó el ministerio de la Defensa, nombró un ministro

civil y re-estableció el sistema nacional de inteligencia. Como lo demuestra Hunter (1997), los diferentes gobiernos civiles ejecutaron significativos recortes en los presupuestos militares incluso antes de unificar la cartera de dicho ministerio y de disolver el sistema de los *ministros da casa* que privilegiaba considerablemente la presencia política de ministros castrenses. El sistema brasileño de inteligencia, una familia extensa y prestigiosa de redes interconectadas en los años de la dictadura (Fico, 2001: 71-148), siguió funcionando hasta el comienzo de los años noventa. En 1992 no obstante, el Serviço Nacional de Informações (SNI) fue seriamente reducido y parcialmente desmantelado (Atunes, 2002: 112). En diciembre de 1999 se creó un nuevo sistema de inteligencia, la Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Zaverucha (2005) proporciona un análisis crítico del sistema de seguridad y de inteligencia brasileño en los años posteriores, pero concuerda también con la conclusión de que tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia y seguridad operan dentro de la legalidad de la democracia y la ley.

El caso de Chile en la transición del régimen militar hasta un gobierno civil e independiente, tomó casi quince años después del cambio oficial del régimen. Como lo describen Agüero y Stark (1998) el montaje de la re-institucionalidad civil en un país donde los estamentos militares y el anterior dictador se habían asegurado el poder a través del control (desde los “enlaces institucionales” entre el sector público y la comandancia general hasta nombramientos en el senado por vida y garantías de amnistía) se convertía en el trabajo de una entera generación de políticos y cuadros civiles (Agüero, 1998, Fuentes, 2000 y Huneus, 2002). La transición completa ha requerido mucha sutileza y diplomacia de parte de los gobiernos civiles y sus asesores. El desprestigio internacional de la figura de Pinochet después de su arresto en Londres contribuyó también al cambio de actitud de una nueva generación de los oficiales superiores militares frente a su ex-comandante-en-jefe y frente a las autoridades civiles de los gobiernos democráticos.

En la mayoría de los países del Caribe, la seguridad es asunto de gobernantes y de legisladores civiles (Bobeá, 2002, 2003). En Centroamérica, región de varias guerras civiles, coincidía la paz con el retiro político de las fuerzas armadas (Rojas, Arévalo y Sojo, 1997, Arnson, 1999). Tanto en Nicaragua como en El Salvador y Guatemala se transformaron los anterior-

res movimientos de guerrilla en partidos políticos, operando dentro de la ley y solicitando el voto del electorado. En estos tres países, durante casi todo el siglo XX ha durado la época de la hegemonía militar en materia de administración o de arbitraje político (Acuña Ortega, 1993, Pérez Brignoli, 1993 y Torres-Rivas, 1993). En El Salvador, desde los años veinte hasta mediados de los ochenta del siglo pasado se controlaba desde el ministerio de Defensa el orden político, el partido oficialista, la institución armada, la inteligencia nacional, dos cuerpos de policía militarizados y asociaciones de paramilitares. El partido sucesor del partido oficial era ARENA, fundada por el ex-mayor D'Aubuisson. En 1985 se separaron oficialmente los escuadrones de la muerte y el partido. Cuando la guerra civil llegó a un empate militar y se acudió en 1990 a las negociaciones, se decidió en los acuerdos de paz la desmovilización de los cinco ejércitos guerrilleros aglutinados en el FMLN, la limpieza general de la institución armada (llegando al relevo de 104 oficiales, empezando con el ministro de defensa), la disolución de los cuerpos de la policía y la reorganización del sistema de inteligencia nacional. La institución armada de Guatemala, igual que su contraparte salvadoreña, ha controlado la escena política nacional durante gran parte del siglo XX. Una larga serie de juntas, jefes militares de facto, presidentes militares elegidos o fraudulentamente llegados al poder controlaron hasta 1985 la presidencia del país, los gobernadores (nombrados por el presidente) y los alcaldes, dirigían la economía nacional en armonía con el CACIF, asociación única de los empresarios y terratenientes. Frente a ellos estaba la guerrilla, desde los años sesenta dirigida por algunos jóvenes militares, líderes estudiantiles y sindicalistas, y transformada en los años setenta en un movimiento nutrido por el campesinado indígena.

Desde finales de los años ochenta se llegó a un proceso complicado de negociaciones de paz (Kruijt y Van Meurs, 1997, Rosada-Grana-dos, 1998, Balconi y Kruijt, 2004). Como consecuencia de los acuerdos se redujo la institución armada entre 1996 y 1997 en términos tanto de personal como de presupuesto. Como en el caso de El Salvador, los diferentes cuerpos de la policía fueron disueltos y se instaló una nueva Policía Nacional Civil, entrenada por sus homólogos españoles (Glebbeck, 2003).

En Nicaragua, los Somoza, padre e hijos, habían establecido una dictadura dinástica a par-

tir de su dominio sobre la Guardia Nacional que desempeñaba a la vez el papel de Fuerzas Armadas y Policía, de su poder económico y de una alianza político-empresarial (Millett, 1977, Walter, 2004). Una guerrilla de la cual una de sus tendencias forjó una alianza política interna (con la oposición legal) y externa (con países como Costa Rica, Cuba, Panamá y Venezuela) y que lideró en los años 1978 y 1979 con éxito una serie de insurrecciones urbanas, llegó al poder y transformó las columnas guerrilleras y las milicias procedentes de sus filas y las de sus simpatizantes en un ejército regular (el Ejército Popular Sandinista) y una policía (la Policía Sandinista) con afiliación institucional al régimen. En 1990, tras la guerra civil con fuerzas irregulares entrenadas y financiadas por la CIA (la Contra), el gobierno sandinista sufrió una derrota electoral, se transformó tanto el ejército y la policía, a la par con una drástica reducción de oficiales y efectivos, deshaciéndose del sistema de Seguridad del Estado, pero manteniendo el núcleo de sus oficiales, en un ejército y una policía nacional, formalmente bajo la dirigencia política de sus respectivos ministros, pero de facto en directa vinculación con la presidencia de la República (Close, 2005, Lacayo, 2005).

En Perú, durante la década de gobierno de un “dictador civil”, el presidente elegido se deshizo de su parlamento por un autogolpe. Durante sus años de gobierno, se re-enfatizó el papel de las instituciones armadas como brazo prolongado del ejecutivo, mientras que –más prominentemente en el Perú– se expandió la posibilidad de actuación de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado. En el caso peruano no es arbitrario denominar el régimen del triunvirato de Fujimori (presidente), Montesinos (jefe de inteligencia) y Hermoza (jefe de las fuerzas armadas) como una “dictadura civil” (Kruijt y Tello, 2002). La caída del régimen de Fujimori fue acompañada y, al final, inducida por varios movimientos. El organizador de las marchas de protesta, Toledo, fue elegido presidente, para luego tener que enfrentarse con una serie de movimientos de protesta semejantes, organizados en frentes regionales en los años 2002 y 2003. La resistencia de parte de las fuerzas armadas estaba por varios años fuera de discusión, cuando se encontraron unos 50 generales y almirantes en la cárcel acusados de corrupción y dando testimonios contra sus colegas. Cuando se publicó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en 2004 y 2005, las Fuerzas Armadas protestaron contra los procesos jurídi-

cos a alrededor de un uno por ciento de sus efectivos. La suerte del Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que bajo Montesinos consistía en dos organizaciones paralelas -una para recolectar inteligencia y otra para intimidar adversarios políticos, chantajear supuestos rivales y actuar como escuadrón de la muerte-, cambió. El presidente Toledo nombró a varias personas de su confianza en los cargos de ministro del Interior, viceministro de la Policía, ministro de la Defensa y jefe del Sistema de Inteligencia. Todos ellos llegaron de las filas de ONG de investigación o de vigilancia de los derechos humanos (Costa y Basombrío, 2003, Basombrío 2004a, 2004b).

En el caso de México, por otro lado, se transformó el sistema político autoritario del partido unitario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un sistema mucho más abierto, procurando mantener, por una parte, las instituciones armadas fuera del contexto político e integrando, por otra parte, a todo el sector de seguridad –el servicio de inteligencia, la policía, la aduana, inteligencia fiscal, etc.- que había sido formado por los Estados Unidos y Canadá (Benítez Manaút, 2002, 2003).

También en Venezuela se evidenció el fracaso de la intervención militar para relevar al presidente electo Chávez ante los movimientos populares que lo llevaron de regreso al Palacio y le han permitido sobrevivir a cuatro huelgas nacionales y un golpe de estado. Las reformas políticas en Venezuela, llegando a la República Bolivariana, fueron acompañadas por una avalancha de procedimientos democráticos: elecciones, plebiscitos. En medio de todo este proceso reformista, el papel de las Fuerzas Armadas, purificadas de la oficialidad adversa al presidente, se ha ampliado para ser instrumento de ejecución del programa de gobierno. Asimismo el gobierno del presidente Chávez recurrió a la creación de milicias populares.

El caso de Colombia, sin embargo, es en varios sentidos una excepción. Colombia presenta el panorama de una lucha armada, donde tres actores -las fuerzas armadas, la guerrilla dividida en dos frentes, y un conjunto nacional de bandas paramilitares- forman parte de un sistema de violencia crónica interrumpida por momentos de empate en la mesa de negociaciones. Esta guerra interna crónica se desempeña en el contexto de un gobierno nacional civil y democráticamente electo de cuya legitimidad no hay duda. La violencia en el país parece ser interminable. A nivel regional y local deben dis-

tinguirse la fragmentación y la proliferación casi inimaginable de actores armados cuyos frentes de lucha se modifican periódicamente (PNUD, 2003). Colombia es un país con importantes “enclaves políticos” donde el gobierno está en manos de los paramilitares o de la guerrilla. Las consecuencias de la convulsión conflictiva de carácter casi perpetuo parecen ser la pérdida casi aceptada del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza por las autoridades democráticas, acompañadas por una serie igualmente casi interminable de negociaciones de paz que, hasta muy recientemente, parecen haber estado condenadas al fracaso (Leal Buitrago, 2004). El presidente Uribe, reelegido en 2006 por segunda vez, lanzó en su primer período de gobierno un programa ambicioso de desarme y reintegración de las fuerzas paramilitares (Koonings y Nordquist, 2005).

3. Líneas de falla de la democracia latinoamericana

En toda América Latina, no obstante, hay dos líneas de falla sobre las cuales puede desmoronarse el proceso de consolidación de la democracia. Hay que recordar que la democracia reestablecida en los años ochenta coincidió con una década de crisis económica y de programas de ajuste estructural. En el lenguaje de las instituciones de las Naciones Unidas, como la CEPAL, el PNUD y la OIT, los años ochenta llegaron a ser tipificados como “la década perdida para América Latina”. Efectivamente, fueron los años de re-estructuración económica y social con grandes consecuencias para las clases medias, la clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural. Se aumentó el proceso de la exclusión crónica de vastos segmentos de la población. Como consecuencia se generalizó en las mismas décadas de los años ochenta y noventa la pobreza masiva, la informalización de la economía y de la sociedad, y la exclusión social de considerables contingentes de la población. Los “nuevos pobres” procedentes de la clase media baja y de la clase obrera han sido las primordiales víctimas de la crisis y de las políticas de ajuste. La pobreza, sobre todo una característica del ámbito rural en la primera parte del siglo veinte, comenzó a manifestarse también con amargura en la segunda mitad del siglo en las ciudades, y sobre todo en las grandes metrópolis de los países latinoamericanos. La ex-

clusión masiva y probablemente transgeneracional en el ambiente urbano empezó a ser sinónimo de conflictos sociales y radicalización política. Relacionada con la cultura de pobreza y la orientación política de los excluidos existe una profunda desconfianza –expresada en la variedad de publicaciones del Latinobarómetro– frente a las instituciones formales de la democracia tales como el Parlamento, los partidos políticos, el sistema legal y las cortes y hasta los sindicatos laborales. En otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de la exclusión social es la erosión de la legitimidad del orden civil, político y público. La enorme exclusión urbana tenía también otra consecuencia: los ghettos de los privilegiados (Caldeira, 2000), donde buscan refugio de sus miedos frente a “la sociedad de afuera” y donde las barreras protegen “un estado hostil hacia buena parte de su población, manifestadas en múltiples formas de discriminación” (O’Donnell, 2003: 14-15).

En segundo lugar, la manifestación de nuevas formas de violencia, esta vez no inmediatamente asociadas a la existencia de regímenes dictatoriales o al funcionamiento de los estados de terror, sino a la presencia y la actuación de nuevos actores armados. Hay una conexión entre la exclusión social y violencia. Aparentemente se nutren mutuamente en territorios urbanos cuando las autoridades del orden y de la ley se retiran o solamente están presentes en forma represiva: entrando con unidades especializadas en la lucha urbana, generalmente incorporadas dentro de las filas de las fuerzas policiales. Es interesante notar que las fuerzas armadas en general son renuentes a estar asociadas con la lucha contra estos nuevos actores violentos privados. En toda América del Sur dejaron estas tareas represivas a la policía. Solamente tres países centroamericanos: El Salvador, Honduras y Guatemala, actúan junto a la policía, y eso tras explícita solicitud del gabinete y el parlamento.

Quisiéramos perfilar todavía mejor el contexto de la violencia y el miedo, enfatizando que muchos de los problemas por analizar se encuentran básicamente, que no exclusivamente, en el ambiente urbano. No es para asombrarse, dado el hecho de que tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos vive en ciudades. Más aún, el ambiente urbano es donde se presenta, primero, la mayor concentración de la pobreza nacional y, segundo, la brecha social más grande y más resentida entre el bienestar de las élites e integrantes de las clases medias,

y la precariedad de los pobladores de los barrios populares, de las comunas, de las barriadas, de las villas, de las favelas, donde se encuentra el denominador común de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la marginalización de manera aglomerada en el sentido económico, social y espacial.

Más aún, es también el ambiente donde se concentran la inseguridad urbana, la violencia y el miedo de los ciudadanos. La asociación entre pobreza y violencia no sigue solamente de un síndrome de miedo que tienen las élites y los integrantes de las clases medias con respecto a la amenaza que constituirían los pobres. En forma exagerada y estigmatizante identifican ellos los barrios marginales como la cuna de la violencia social, de la criminalidad, de venganza. Como lo han demostrado los estudios empíricos de Moser, McIlwaine y Rodgers, también son los pobres los que identifican, y esta vez como las víctimas, la coincidencia de la pobreza y la marginalización con la presencia de actores armados que compitan por la hegemonía sobre el espacio urbano con las autoridades legítimas de la ley y el orden que con frecuencia, por su ausencia o su no actuar, dejan el campo libre a quienes a la fuerza buscan un liderazgo territorial urbano¹.

4. Pobreza urbana, desborde popular y la erosión del orden social formal

Tradicionalmente, la ciudadanía de segunda clase ha sido identificada con las poblaciones indígenas y con el campesinado minifundista. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la pobreza extrema y la exclusión social en América Latina tenían un rostro predominantemente rural: se trataba sobre todo de la población indígena con carencias económicas, sociales y políticas que se traducían en una ciudadanía de segunda clase (Bastos, 1998: 100-101). En algunos países la exclusión social de los indígenas adquirió un estatus casi permanente. Por esta razón Solares (1992: 50) tipificaba a Guatemala como “un estado sin ser una nación”. Y Flores Galindo (1994: 213) caracterizaba a Perú, por la segregación entre mestizos e indios, como “una república sin ciudadanos”.

Sin embargo, la informalidad urbana se ha hecho sentir en toda su fuerza como resultado de la crisis económica y los años del reajuste estructural que han experimentado casi todos los países del continente. La presencia de enormes contingentes de pobres, principalmente en las grandes aglomeraciones urbanas, comenzó gradualmente a ser identificado como un problema de suma importancia. En otra publicación, sobre la dinámica de la pobreza urbana, la informalidad y la exclusión social en América Latina, introdujimos la noción de una nueva clase transgeneracional de habitantes urbanos pobres a partir de los años ochenta en adelante (Kruijt, Sojo y Grynspan, 2002), “ciudadanos informales”. El PNUD (2004) lanzó la noción de “ciudadanía de baja intensidad”. Entre 1950 y 1980, la economía informal (medida en términos de autoempleo) en el continente creció desde el 15 hasta el 20 por ciento de la población económicamente activa (PEA), para acelerarse considerablemente más en las dos décadas posteriores a 1980 (Galli y Kucera, 2003: 24-26). Desde Monterrey en el norte de México, hasta Puerto Montt, en el sur de Chile, los informales y los autoempleados invadieron el espacio público en las calles. Invadieron, literalmente, los anillos de miseria que rodean los cascados urbanos. Al comienzo del siglo XXI, América Latina es el continente donde segmentos significantes de la población, en algunos casos constituyendo la mayoría de la población nacional, son a la vez pobres, informales y excluidos. La economía informal está compuesta sobre todo por autoempleados cuya actividad económica es de sobrevivencia diaria (Alba Vega y Kruijt, 1995). Los microempresarios forman, dentro de la informalidad, una relativa élite. Portes y Hoffman (2003: 51) enfatizan el hecho que hay una zona gris entre la informalidad y la economía formal. Sin embargo, también ellos indican el proceso de marginalización estructural de la informalidad. La informalidad tiene también un rostro étnico: Etnicidad es un factor de estratificación. Entre los mecanismos de sobrevivencia predominan lazos de etnicidad y de religión, relaciones de familia (reales o simbólicas) y cercanía en términos de lugar de nacimiento o de pertinencia a los barrios populares. La economía y sociedad informal se hallan excluidas del empleo estable, del ingreso regular, de los sindicatos laborales, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales que proveen servicios básicos, como los servicios de vivienda.

Datos de la CEPAL, el PNUD y la OIT siguen sistemáticamente la evolución de la pobreza en

¹ McIlwaine y Moser 2001, 2004, 2006, Moser 2004, Moser y McIlwaine 1999, 2004, Moser y Rodgers, 2005.

América Latina desde 1980 hasta la fecha. Entre 1980 y 2002 el porcentaje de pobres en América Latina subió de 41 hasta 44 por ciento, de pobres urbanos de 30 hasta 38 por ciento, de pobres rurales de 60 hasta 62 por ciento (CEPAL, 2006: 64). Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el porcentaje más alto se dio en el año 1990 con 48 por ciento para América Latina, 41 para la pobreza urbana y 65 para la pobreza rural. La relativa reducción de la pobreza se atribuye, sin embargo, no principalmente al mejoramiento de las economías internas sino a los efectos de la migración externa y por ende de las remesas familiares en los últimos quince años. El flujo de remesas a la región representó en 2004 alrededor de US\$ 45 mil millones, cifra superior tanto a la inversión extranjera directa como a la asistencia total de los donantes, y con un crecimiento fuerte en comparación con el año 2001 cuando el monto total de las remesas en América Latina era un poco menos que US\$ 25 mil millones. Del volumen total de las remesas en 2004, casi 55 por ciento fue de los países mesoamericanos. México adquirió un total de US\$ 17 mil millones. Las pequeñas economías de cuatro países centroamericanos, de los cuales destacan El Salvador y Guatemala, recibieron en total US\$ 7,8 mil millones (CEPAL, 2006: 94 - 98).

En el cuadro 1 presentamos datos sobre la consolidación de la economía informal y por ende del orden social y cultural informalizado en la región. El desempleo ponderado abierto urbano creció entre 1985 y 2003 de 8 a 11 por ciento. El porcentaje del empleo urbano cubierto por el sector informal disminuyó entre 1990 y 2003 de 57 hasta el 53 por ciento. Consecuentemente, el empleo generado en el sector informal creció de 43 hasta el 47 por ciento (OIT, 2004: 91, 93). Estas cifras indican un proceso de descomposición de clase y la reestructuración del orden social en toda América Latina. Sectores económicos paralelos, jerarquías sociales paralelas y estructuras institucionales paralelas se originaron en la formalidad y la informalidad, resultando en un orden económico, social, político y cultural mucho más heterogéneo, girando alrededor de la división de la riqueza y pobreza, de la integración y la exclusión. Una institucionalidad formal e informal se desarrolló con lógica, moralidad y sanciones propias: el orden reglamentado de la economía y sociedad informal a diferencia de la anarquía disfrazada de la pobreza, la informalidad y la exclusión social.

Cuadro 1
Estructura del empleo urbano en América Latina, 1990-2003 (porcentajes)

América Latina	1990	América Latina	2003
sector público	14	sector público	14
sector privado	43	sector privado	40
autoempleados	22	autoempleados	24
empleados en microempresas	15	empleados en microempresas	16
servicio doméstico	6	servicio doméstico	7

FUENTE: elaboración de datos de OIT (2004: 97 - 101).

La economía y sociedad informal generan asimismo brechas demográficas y desintegración de la estructura de las familias. América Central, cuyas sociedades son atormentadas por la pobreza y por los efectos de sus guerras internas, tal vez presenta el ejemplo más expresivo de tales rupturas. Mahler (2002) presenta un panorama de los procesos migratorios tanto internos como externos de los países centroamericanos: el desplazamiento interno de los refugiados por la violencia de las guerras civiles y la migración extra-regional, de hecho un éxodo hacia México y los Estados Unidos. Unos 1,130.000 de los 30 millones de centroamericanos viven ahora permanentemente en los Estados Unidos. El 40 por ciento de ellos proviene de El Salvador. Otros 700.000 centroamericanos se encuentran en este país como indocumentados. Mahler analiza una serie de estudios de la CEPAL para subrayar la importancia de las remesas, que mantienen las economías domésticas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pérez Sáinz (2004) complementa este esbozo con un análisis más preciso de la dependencia familiar de las remesas, dado la reducción estructural del mercado de trabajo centroamericano, las tasas de desempleo de las mujeres y de los jóvenes, del monto de las familias quebradas y la desesperación de los familiares que quedaron en el país mientras los miembros masculinos salieron al exterior por la imposibilidad de adquirir un ingreso en el mercado laboral doméstico.

Este efecto de la pobreza y de la exclusión está provocando un desborde popular, para usar las palabras proféticas del antropólogo peruano Matos Mar (1980). En su ensayo predijo la desinstitucionalización de las estructuras sociales tradicionales de la sociedad capitalina y nacional y la emergencia de una cualitativamente nueva sociedad urbana a partir del papel de los pobladores de los pueblos jóvenes, el eufemismo político usado en la década de los ochenta para los habitantes de las barriadas y los migrantes en los barrios de invasión. Predijo también el nacimiento tímido de una diversidad de nuevas organizaciones que pretendían representar los empresarios informales y los autoempleados, como las cámaras regionales de los artesanos y los comedores populares en los barrios de miseria de Lima Metropolitana. Todas esas organizaciones tienen en común la relación ambivalente de dependencia de instituciones profesionales de desarrollo, como las fundaciones religiosas y eclesiásticas, las ONG, donantes extranjeros, bancos privados con una cara humana y de la financiación

de gobiernos municipales y nacionales. Veinte años más tarde, en una edición actualizada que también toma en cuenta los procesos de las dos décadas intermedias, Matos Mar (2004) efectivamente analiza el colapso de las instituciones que tradicionalmente funcionaron como el sostén del orden democrático: el decaimiento de los partidos políticos, la erosión del status del poder legislativo y del sistema judicial, el ocaso del prestigio de los magistrados y de las autoridades de la ley y del orden, el colapso de las anteriormente poderosas centrales y confederaciones de sindicatos de los trabajadores y el debilitamiento de las demás entidades de la sociedad civil, como las cámaras de industria y comercio y los colegios profesionales de los médicos, los abogados, los ingenieros etc. Matos Mar termina su análisis todavía en un tono de cierto optimismo como si se pudiera cerrar la brecha entre la informalidad de la sociedad y la formalidad del Estado a través de reformas sociales y políticas. Pero, ¿realmente es viable tal agenda de re-institucionalización más o menos pacífica? Las instituciones paralelas, las jerarquías paralelas y los sectores paralelos que emergieron en el cauce de las líneas divisorias de la pobreza, la informalidad y la exclusión social ya pueden haber constituido un orden económico, social y político más o menos duradero, aunque heterogéneo. Instituciones formales e informales se regulan según su propia lógica, legitimidad, moralidad y sanciones: el orden cívico de la economía y sociedad formal junto a la semi-anarquía de la pobreza, la informalidad y la exclusión social.

5. Del desborde popular al desborde de la violencia: Exclusión, inseguridad y violencia

La ciudadanía informal tiene un rostro violento. A finales de los años setenta Walton (1976, 1977) introdujo el concepto de “ciudades divididas”. Durante los años ochenta las ciudades divididas o fragmentadas fueron analizadas sobre todo en términos de la miseria o la exclusión urbana y fueron generalmente tipificadas en términos de la dicotomía entre las elites y la clase media alta versus los pobladores de las favelas o barriadas. Sin embargo, a partir de los años noventa, se comenzaron a identificar las profundas divisiones urbanas con la falta de seguridad humana y la falta de la presencia de

autoridades protectoras en las partes descuidadas del territorio urbano, donde la pobreza suele coincidir con la violencia. El caso de Río de Janeiro, por ejemplo, cuyas favelas paupérrimas son sinónimo de áreas de acceso limitado dentro de las fronteras metropolitanas, adquirió una reputación deprimente en el círculo de autores y analistas de la violencia urbana. La publicación de Ventura (2002 [1994]) sobre la *cidade partida* era seguida por una serie de publicaciones². Después de re-estudiar las favelas y sus pobladores, de su investigación de los años setenta treinta años más tarde, Perlman (1976, 2005: 22) llega a la conclusión desconcertante de que el “mito de la marginalidad” se ha transformado en la “realidad de la marginalidad”. Su re-estudio demuestra que violencia e inseguridad urbana, junto al estigma de vivir en una favela, son los mecanismos más poderosos que contribuyen a esa “nueva marginalidad”. El debate sobre el panorama de la violencia urbana en los territorios metropolitanos de América Latina es descrita, en la actualidad, por estudios comparativos de De Olmo et al (2000), Rotker, Goldman y Balan (2002), Koonings y Kruijt (2004) y Moser y McIlwaine (2004).

La violencia, no obstante, no es solamente arraigada en la vida diaria de los pobres urbanos, sino es, o era, también una característica de las prolongadas guerras civiles de los países de Centroamérica y los países andinos. Ya mencionamos el cambio de actores en el panorama de la violencia y el terror. Efectivamente, los principales actores del terrorismo de Estado en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, o sea, los militares, las instituciones asociadas a la seguridad de estado y la policía, se retiraron mayoritariamente para conceder paso a actores no-estatales, quienes operan en enclaves urbanos de la violencia, pugnando y combatiendo entre sí el dominio sobre territorios urbanos, generalmente el hábitat de los pobres y marginados. Actores armados, parte de ellos procedentes de las instituciones y bandas de combatientes (fuerzas armadas, paramilitares, frentes guerrilleros) y otra parte perteneciente a bandas criminales y bandas juveniles, lograron montar sistemas paralelos de violencia en países como Colombia, Guatemala y México y, en un sentido tal vez más restringido, en la Argentina, Brasil, El Salvador y Honduras y el Perú.

² Barcellos, 2003; Chaves Pandolfi y Grynszpan, 2003; Evangelista, 2003; Zaluar, 1994, 2001.

Colombia y Guatemala son, tristemente, dos excelentes ejemplos de cadenas de causalidad entre la violencia generalizada de nivel nacional y enclaves de paz de nivel local. Sin embargo, la violencia nacional se ha traducido en múltiples formas de violencia de nivel local. La Guatemala posbélica es atormentada por nuevas formas de violencia causada por bandas juveniles, ex-fuerzas paramilitares que buscaron empleo en la criminalidad, y ex-fuerzas militares y de la policía que se refugiaron en la criminalidad y el tráfico de droga (Sieder et al., 2002). Según los datos publicados en el diario *El Periódico* del 13 de mayo de 2004, el número total de fuerzas paramilitares empleadas por el gobierno durante los años ochenta y noventa era de 1'200.000, sobre una población total de 12 millones. De estos 1' 200.000, viven actualmente unos 400.000 en los Estados Unidos. En Colombia se ha institucionalizado el desborde de la violencia durante los últimos treinta años. El conflicto político también ha tenido consecuencias para la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la criminalidad local. La guerra civil en este país es reproducida a escala ampliada en las tantas micro-guerras en las áreas metropolitanas y las comunas urbanas.

Describiendo el escenario complicado de la violencia colombiana, Pécaut (1999) introdujo la noción de la banalidad de la violencia. Posteriormente, el mismo autor (Pécaut 2001, 2003) discutió extensamente la situación colombiana donde la exclusión, el crimen y la violencia empezaron a formar parte del vórtice del crimen organizado con base en la producción y el comercio de la droga dentro del conflicto civil del país (PNUD, 2003, Koonings y Nordquist, 2005). El conflicto interno prolongado transformó el país en una serie de pequeños teatros de guerra donde múltiples actores armados trataron de interferir (Leal Buitrago 1999, 2001). A nivel nacional puede hacerse distinción entre las fuerzas estatales de seguridad, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) como actores armados de la “izquierda” y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como las fuerzas paramilitares unificadas de la derecha, organizadas por iniciativa de las élites rurales y los representantes de la economía clandestina para proteger sus intereses. Detrás de esta configuración de nivel nacional hay eslabones hacia las fuerzas legales de seguridad y fuerzas oscuras entre las fuerzas del orden y la ley y las fuerzas del desorden, entre las fuerzas paramilitares y los escuadro-

nes de la muerte, entre la economía oficial y la clandestina.

Focalizando en los niveles locales aparece una estructura enormemente fragmentada. Escobar (2002) demuestra la articulación de alianzas que se modifican casi continuamente entre los socios locales y los actores nacionales. Avilés (2001: 43-47) menciona más de 100 asociaciones paramilitares, unificadas durante seminarios y conferencias en los años noventa en instituciones como CONVIVIR, un agrupamiento de movimientos de combatientes y de vigilantes financiados por empresarios rurales y que consiste en centenares de comités locales y de serenazos locales. Ceballos Melguizo (2001: 115-124) proporciona un análisis impresionante de la fragmentación de la violencia en Medellín durante los años ochenta y noventa. En estos micro-mundos de la violencia operan consorcios criminales como las bandas de la pesada, redes de empresarios clandestinos y de contrabando, y autoridades provincianas y locales que emplean criminales para el trabajo sucio ocasional, organizados en oficinas. Hay también grupos de subalternos alrededor de los líderes de las mafias que actúan como intermediarios en el mercado macabro de los contratos de la muerte y la criminalidad de mayor escala, galladas (pandillas juveniles) alrededor del tráfico de cocaína, y los sicarios (jóvenes que matan por contrato) para los subcontratos de la muerte a pedido. Las llamadas bandas de chichipato que llevan armas caseras, roban tiendas, casas, vehículos y asaltan peatones en la calle en los barrios de la pobreza, usando bazuco, una base de coca potente, como estimulante diario. Grupos de protectores y de limpieza social se dedican a ejecuciones por contrato, mientras que agrupaciones fragmentarias de paramilitares, milicias y criminales locales encuentran empleo en masacres y otros actos violentos. Grupos de milicias híbridos son compuestos de individuos de clase baja, procedentes de las fuerzas de la guerrilla de la izquierda y criminales comunes, organizados en bandas locales. El tráfico de droga acompañaba su surgimiento. Entraron en el mercado de protección en los años noventa, actuando como adversarios de los escuadrones de la muerte y agrupamientos de limpieza social de la derecha. Presentándose como grupos protectores de los barrios comenzaron a combatir y matar a los criminales y traficantes de droga y bazuco. Los primeros grupos tenían nombres como las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MP/PP), Milicias Populares Valle de Aburrá (MP/VA), Milicias para

América Libre etc. Todos estos grupos establecieron lazos con bandas y líderes locales de la izquierda. Fueron el producto de la anomia local, originada por el crecimiento explosivo de pandillas criminales y la crisis y dispersión de la izquierda armada después de la política del presidente Betancur para la reinmersión en la sociedad (Leal Buitrago, 2004). La consecuencia inmediata era el fenómeno de los campamentos de paz donde los jóvenes presentes recibieron su indoctrinación ideológica y un entrenamiento en el uso de armas. Algunos exmilitantes de la izquierda encontraron empleo en el mercado de protección y autodefensa. Otros entraron en las bandas de droga. La retórica revolucionaria fue re-usada para facilitar nuevas actividades de extorsión disfrazadas como impuestos populares y donaciones revolucionarias. Otros grupos, como Los Capuchos comenzaron a actuar como ronderos, ajusticiando pequeños criminales que aportaba el apoyo popular y cierta legitimidad. Estos grupos se subdividieron rápidamente y nuevos elementos de carácter eminentemente criminal adquirieron el liderazgo. Los milicianos formaron luego nuevas bandas, esta vez de escala menor y en abierta rivalidad y competencia con las bandas puramente criminales y con la policía. El proceso de fragmentación continuó en los siguientes años.

6. Vacíos locales de gobierno

La proliferación de las mini-guerras y de los actores armados (urbanos) involucrados en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y representantes legales de la ley y el orden en áreas específicas (Kruijt y Koonings, 1999: 12). En estos vacíos emerge una simbiosis osmótica entre el Estado, más precisamente la policía y el sistema legal, la criminalidad común y elementos criminalizados de (ex-)miembros de las fuerzas armadas, la policía, unidades paramilitares y combatientes guerrilleros. Entonces se adaptan la ley y la justicia local al resultado del orden oscilante entre las fuerzas paralelas de grupos locales de poder y autoridades morales, representantes electos de asociaciones de vecinos, pobladores o moradores, sacerdotes o pastores evangélicos, a veces empresarios exitosos o propietarios de emisoras locales de radio o TV en alianzas fluctuantes.

Es interesante puntualizar que en este contexto de violencia inherente y de mini-guerras por motivo del control sobre pequeños territorios (urbanos) cuyos teatros tienen un alto grado de volatibilidad, las fuerzas armadas no desempeñan un papel preponderante. En los países del Cono Sur y en cierto modo también en los países andinos y centroamericanos, como ya décadas antes en México, las fuerzas armadas se retiraron de la arena pública para reformular sus objetivos institucionales en la dirección de militares profesionales como en los países miembros de la OTAN. Las instituciones armadas dejaron prudentemente la confrontación pública con actores violentos no estatales a las fuerzas especiales de la policía, entrenados en el combate de contra urbana. No obstante, mientras que las manifestaciones de esa nueva violencia gradualmente asumen rasgos permanentes, la anomalía de esta situación comienza a indicar el fenómeno del estado ausente (por lo menos parcialmente) en materia de seguridad y justicia.

Otro rasgo es la proliferación de la vigilancia privada: la policía privada, guardianes privados nocturnos en los barrios de la clase media e incluso en los distritos populares, serenazos particulares, escuadrones especiales de protección, fuerzas inconfundibles de protección del sistema bancario y financiero, fuerzas de justicia privada, comandos paramilitares, escuadrones de muerte. Originalmente asociadas con las guerras civiles prolongadas en países como Colombia y Guatemala, estas asociaciones de orden y protección privadas se expandieron en toda América Latina y en algunos estados del Caribe, como Jamaica.

En tercer lugar podemos mencionar los nuevos actores armados en las favelas, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de facto es el traficante o el *drug lord*, quien da órdenes para los ajusticiamientos, pero funciona también como proveedor financiero de las ONG en su territorio. Durante una entrevista del autor con Deusimar da Costa, presidente de la Federação Municipal das Associações de Favelas do Rio de Janeiro (FEMAFARJ/FAR-Rio), ella enfatizó muy franca que una coexistencia pacífica con los traficantes locales era un asunto común y corriente. “Ellos también son moradores”, dijo la señora, “y la presencia de ellos no nos molesta. Ellos tienen el poder de intervenir y, a pesar de todo, son moradores. Mantenemos, como puede decirse, una vi-

da simbiótica. No estamos inclinados de llamar a la policía en cada momento”³. No se trata de pequeños bolsones o territorios olvidados dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de jurisdicciones de facto de considerable tamaño y proporción, tal vez conformando el 25 por ciento del contorno urbano en metrópolis como Rio de Janeiro y São Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Medellín, México DF y Guadalajara, y otras ciudades importantes. Los traficantes, mayoritariamente jóvenes o jóvenes adultos, son los nuevos dueños urbanos de la violencia. Ellos actúan en sus barrios también como los nuevos representantes de la ley paralela, no por justicia sino ajusticiando. A veces cobran también impuestos paralelos y demuestran una cierta benevolencia hacia el desarrollo local paralelo, ofreciéndose a financiar las ONG locales en las favelas y villas marginalizadas. En algunos casos también negocian explícitamente con los líderes religiosos locales, quienes aprendieron a convivir en relaciones de coexistencia pragmática. Durante dos entrevistas del autor con Jonas Pedreina, presidente de la asociación de moradores en una de las favelas en el Cono Norte de Rio de Janeiro, el entrevistado dejó claro que el traficante local repetidas veces se había ofrecido a financiar las obras sociales de la iglesia y de las ONG afiliadas a la asociación de pobladores “sin ninguna obligación”; pero que tanto él como el pastor evangélico habían entendido que el arreglo implicaría el permiso de reclutar jóvenes para tareas de protección y de transporte de contrabando. Tanto el pastor como el líder barrial habían rechazado las propuestas⁴. El mismo fenómeno se presenta en Gran Buenos Aires⁵. Los traficantes en las villas argentinas, las favelas brasileñas, los tugurios colombianos y las zonas guatemaltecas han reproducido escenarios de guerra o guerrilla nacional en los territorios urbanos.

Algunos miles de niños y adolescentes funcionan como soldados de la droga en las guerras urbanas en Rio de Janeiro. Zaluar (2000) tipificó la relación entre bandas juveniles y el comercio de drogas en las favelas de Rio de Janeiro con mucha razón como una integración perversa de la economía clandestina y la violencia urbana. En este contexto también hay que analizar el nuevo papel de las bandas juve-

³ Entrevista del día 28 de agosto de 2003 en Rio de Janeiro.

⁴ Entrevistas durante los días 29 y 30 de agosto de 2003 en Rio de Janeiro.

⁵ Comunicación personal con Marcelo Saín, Vice-ministro de Seguridad en la provincia de Gran Buenos Aires, el día 26 de junio de 2003 en Santiago de Chile.

niles criminales (maras) en Centroamérica. En El Salvador, Honduras, Guatemala y en menor grado en Nicaragua las maras son oficialmente consideradas como amenaza principal de la seguridad nacional (Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003, Savenije, 2004). Decenas de miles de jóvenes entre 12 y 30 años de edad pertenecen a una de las maras o pandillas juveniles, que tienen una presencia nacional macabra por ser responsables del 20 por ciento (Guatemala) y 45 por ciento (El Salvador y Honduras) de los homicidios por año en 2003 (Peetz, 2004). Las estimaciones del número de los mareros por país difieren de manera considerable. Peetz (2004: 59) cita diferentes fuentes que mencionan un número de jóvenes mareros entre 14.000 y 200.000 en Guatemala, 10.500 y 35.000 en El Salvador, y 36.000 y 100.000 en Honduras. Nicaragua cuenta tal vez con 4.500 mareros, Costa Rica con 2.600, Panamá con 1.385, y Belice con 100. La economía marera centroamericana depende del control territorial y acceso al transporte y comercio local de drogas. La escala de operaciones en términos de la violencia percibida es tan grande que los parlamentos salvadoreños y hondureños aprobaron una legislación especial anti-marera que permitiera comandos especiales compuestos por miembros de las fuerzas policiales y militares (Operación Libertad en Honduras en 2003, Plan Mano Dura en El Salvador en 2003). En El Salvador el número de víctimas de la violencia marera ya ha pasado el número total de los muertos durante la guerra civil. En 2004 los presidentes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo para concertar esfuerzos para combatir la violencia criminal juvenil en los tres países. En abril de 2005 los jefes de estado mayor de las instituciones armadas de estos tres países solicitaron al jefe del US Southern Command, el general Bantz Craddock, asistencia técnica y financiera para crear una fuerza especial combinado del ejército y la policía para combatir el tráfico de droga y las maras⁶. El hecho hace alusión a la confrontación, en Colombia durante la década de los noventa, entre los carteles de droga, el gobierno nacional y las fuerzas espaciales norteamericanos.

⁶ *Siglo Veintiuno* (Guatemala) del 15 de abril de 2005.

7. Conclusiones

La exclusión social y los fenómenos asociados, como la pobreza, la discriminación y la informalidad conforman un contexto fértil para que puedan brotar los gérmenes de la violencia y el terror en los segmentos pobres, marginados, separados de las metrópolis y las conglomeraciones urbanas grandes (Briceño-León, 2002, Davis, 2004). Cuando la exclusión social, como en el caso de América Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, en el ámbito espacial, social, cultural, cuando la ausencia de los actores legítimos de la ley y del orden se manifiesta en forma crónica, se abre el camino para los actores armados privados e informales que ocuparán el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos de desintegración, dominio de criminales, del terror y el miedo (Koonings y Kruijt, 2006). Hay una tendencia para la consolidación de este fenómeno tomando en cuenta que la juventud de estos barrios, favelas, barriadas o comunas de miseria está acostumbrándose desde su niñez a la “normalidad” de la violencia, siendo “catequizados” por la violencia doméstica habitual (Moser y McIlwaine, 2004), por la violencia omnipresente en la calle (Rotker et al., 2002) y por la actuación represiva incesante de la policía que, cuando esté presente, está presente con pistola o ametralladora en la mano. Las políticas públicas que pretenden combatir la exclusión social y “pacificar” la relación cívico-policial, entonces, aparentan ser sino una solución, por lo menos un freno a este proceso de deterioro. Combatir la exclusión social, fortalecer el tejido social local, balancear bien entre las tareas represivas y las preventivas de la policía nacional y local, fortalecer los gobiernos municipales y locales y, sobre todo, ganar y mantener la confianza de las organizaciones populares locales parecen ser los ingredientes del cóctel de buen gobierno en asuntos de seguridad cívica. Uno de los ejes centrales es la confianza mutua entre las fuerzas del orden y la población local, y la participación voluntaria en comités de seguridad local.

El arriba citado informe del PNUD (2004) sobre el estado de la democracia en América Latina, que hace uso de una enorme encuesta del Latinobarómetro, nos informa que, a la fecha, la mayoría de la población latinoamericana preferiría un gobierno de tinte autoritario que llegara a encontrar una solución para la pobreza masiva. Eso contribuye a la formulación de

la pregunta sobre el carácter de la estabilidad del orden político que implica la existencia generalizada de una ciudadanía de segunda clase. La pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estándar de integración de los marginalizados urbanos. Segmentos considerables de la población de América Latina sobreviven en la economía y sociedad informal donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta nueva violencia son reclutados de las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión-con-violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático y los perímetros de la ciudadanía. La violencia crónica, incluso dentro de los límites de los enclaves territoriales restringidos contribuye a la erosión de la legitimidad del orden político. Es

paradójico que varios gobiernos latinoamericanos, como los líderes populares y las autoridades religiosas en su contexto local, hayan aceptado una coexistencia pacífica de facto con los actores no-estatales de la violencia, mientras que ellos no públicamente constituyen una amenaza para las autoridades políticas de nivel nacional. La pregunta clave es, por supuesto, cuanto tiempo más la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina puede ser garantizada por este precario equilibrio entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de la violencia.

Referencias bibliográficas

- Alba Vega, C., D. Kruijt (1995), *La utilidad de lo minúsculo. Estudios sobre la informalidad y la microempresa en México, Centroamérica y los países andinos*, El Colegio de México (Jornadas 125), México DF.
- Acuña Ortega, V. H. (1993), *Las repúblicas agroexportadoras (Tomo IV de la Historia general de Centroamérica (1970 – 1945))*, Sociedad Estatal Quinto Centenario / FLACSO, Madrid y San José.
- Agüero, F. (1998), *Brechas en la Democratización: Las visiones de la elite política sobre las fuerzas armadas*, FLACSO (Nueva Serie FLACSO), Chile.
- Agüero, F., J. Stark (eds.) (1998), *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America*, North-South Center Press, Coral Gables.
- Avilés, W. (2001), “Institutions, military policy, and human rights in Colombia”, *Latin American Perspectives*, 116, 28 (1), pp. 31-55.
- Atunes, P. C. B. (2002), *SNI & ABIN. Uma leitura de atuação dos serviços secretos prasilieiros ao longo do século XX*, Editora FGV, Rio de Janeiro.
- Balconi, J., D. Kruijt (2004), *Hacia la reconciliación. Guatemala 1960 – 1996*, Piedra Santa, Guatemala.
- Barcellos, C. (2003), *Abusado. O dono do morro Santa Marta*, Editora Record, Rio de Janeiro.
- Basombrío Iglesias, C., G. Costa Santolalla, M. Huerta Barrón, S. Villarán de la Puente (2004a), *Activistas de derechos humanos a cargo de la seguridad u el orden en el Perú*, Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima.
- Basombrío, C. et al. (2004b), *Manejo y gestión de la seguridad. De la reforma al inmovilismo*, Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima.
- Bastos, S. (1998), “Los indios, la nación y el nacionalismo”, en C. Dary (ed.), *La construcción de la nación y la representación ciudadana en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia*, FLACSO, Guatemala, pp. 87-157.
- Benites Manaút, R. (2002), “México: Doctrinas de seguridad y defensa (del siglo XX al XXI)”, en J. S. Tulchin (ed.), *Nuevos temas de seguridad en América Latina*, Fundació CIDOB, Barcelona, pp. 55 – 72.
- Benites Manaút, R. (2003), “América del Norte: ¿Seguridad regional en construcción?”, Ponencia presentada en el 51 Congreso de Americanistas, Santiago de Chile, 14 – 18 de julio.
- Bobea, L. (ed.) (2002), *Soldados y ciudadanos en el Caribe*, FLACSO, Santo Domingo.
- Bobea, L. (ed.) (2003), *Entre el crimen y el castigo. Seguridad ciudadana y control democrático en América Latina y el Caribe*, Nueva Sociedad, Caracas, pp. 175 – 228.
- Bodemer, K., S. Kurtenbach, K. Meschkat (eds.) (2001), *Violencia y regulación de conflictos en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas.
- Briceño-León, R. (2002), “Introducción: La nueva violencia en América Latina”, en R. Briceño-León (ed.), *Violencia, sociedad y justicia en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, pp. 13 – 26.
- Caldeira, T. (2000), *City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in Sao Paulo*, University of California Press, Berkeley.
- Camou, A. (2002), “Argentina (otra vez) en crisis. El dolor de ya no ser”, *Anuario social y político de América Latina y El Caribe*, 5, Nueva Sociedad / FLACSO, Caracas y San José, pp. 21 – 28.
- Ceballos Melguizo, R. (2001), “The Evolution of the Armed Conflict in Medellín. An Análisis of the Major Actors”, *Latin American Perspectives*, 116, 28 (1), pp. 110-131.
- Chaves Pandolfi, D., M. Grynszpan (2003), *A favela fala. Depoimentos ao CPDOC*, Editora Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro.

- CEPAL (2006), *Panorama social de América Latina 2005*, Comisión Económica para América Latina LC/G.2288-P, Santiago de Chile.
- Close, D. (2005), *Los años de Doña Violeta. La historia de la transición política*, Lea Grupo Editorial, Managua.
- Crabtree, J. (2005), *Perfiles de la protesta. Política y movimientos sociales en Bolivia*, Fundación PIEB, La Paz.
- Costa, G., C. Basombrió (2003), *Liderazgo civil en el Ministerio del Interior. Testimonio de una experiencia de reforma policial y gestión democrática de la seguridad en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Lima.
- Davis, M. (2004), “Planet of Slums”, *New Left Review*, 26, marzo-abril.
- Escobar, C. (2002), “Clientelism and citizenship: the limits of democratic reform in Sucre, Colombia”, *Latin American Perspectives*, 126, 29 (5), pp. 20 – 47.
- Evangelista, H. de Araujo (2003), *Rio de Janeiro. Violência, jogo de bicho e narcotráfico segundo uma interpretação*, Editora Revan, Rio de Janeiro.
- Fico, C. (2001), *Como heles Aguiar. Os subterrâneos da ditadura militar: Espionaje e polícia política*, Editora Record, Rio de Janeiro.
- Flores Galindo, A. (1994), *Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes*, Editorial Horizonte, (4ª edición), Lima.
- Fuentes, C. (2000), “After Pinochet: Civilian Policies toward the Military in the 1990s Chilean Democracy”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 42, 3, pp. 111-142.
- Galli, R., D. Kucera (2003), *Informal Employment in Latin America: Movements over Business Cycles and the Effects of Worker Rights*, ILO / International Institute for Labour Studies, (DP/145/2003), Ginebra.
- Glebbeek, M-L. (2003), *In the Crossfire of Democracy. Police Reform and Police Practice in Post-Civil War Guatemala*, Rozenberg Publishers (Latin America Series), Amsterdam.
- Huneus, C. (2002), *El régimen de Pinochet*, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile.
- Hunter, W. (1997), *Eroding Military Influence in Brazil - Politicians against Soldiers*, The University of North Carolina, Chapel Hill.
- Koonings, K., D. Kruijt (2002), “Military Politics and the Mission of Nation Building”, en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Political Armies. The Military and Nation Building in the Age of Democracy*, Zed Books, Londres, pp. 9 – 34.
- Koonings, K., D. Kruijt (2004), “Armed Actors, Organised Violence and State Failure in Latin America: A Survey of Issues and Arguments”, en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Zed Books, Londres, pp. 5 – 15.
- Koonings, K., D. Kruijt (2006), “Fractured Cities, Second-Class Citizenship, and Urban Violence: An Overview”, en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America*, Zed Books, Londres (por publicarse).
- Kruijt, D. (2001), “Low Intensity Democracies: Latin America in the Post-dictatorial Era”, *Bulletin of Latin American Research. Journal of the Society for Latin American Studies*, 20 (4), pp. 409 – 430.
- Kruijt, D. (2004), “Exclusión social y violencia urbana en América Latina”, *Foro Internacional*, 178, 44 (4), octubre-diciembre, pp. 746 – 764.
- Kruijt, D., K. Koonings (1999), “Violence and Fear in Latin America”, en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence, and Terror in Latin America*, Zed Books, London, pp. 1-30.

- Kruijt, D., K. Koonings (2004), "The Military and their Shadowy Brothers-in-Arms", en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Zed Books, Londres, pp. 126 – 147.
- Kruijt, D., R. van Meurs (2000), *El guerrillero y el general. Rodrigo Asturias y Julio Balconi sobre la guerra y la paz en Guatemala*, FLACSO, Guatemala.
- Kruijt, D., C. Sojo, R. Grynspan (2002), *Informal Citizens. Poverty, Informality and Social Exclusion in Latin America*, Rozenberg Publishers (Latin America Research Series), Amsterdam.
- Kruijt, D., M. P. Tello (2002), "From Military Reformists to Civilian Dictatorship. Peruvian Military Politics from the 1960s to the Present", en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Political Armies. The Military and Nation Building in the Age of Democracy*, Zed Books, Londres, pp. 35 – 63.
- Lacayo Oyanguren, A. (2005), *La difícil transición nicaragüense. En el gobierno con doña Violeta*, Fundación UNO (Colección Cultural de Centro América, Serie Ciencias Humanas, 12), Managua.
- Leal Buitrago, F. (ed.) (1999), *Los laberintos de la guerra. utopías e incertidumbres sobre la paz*, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Leal Buitrago, F. (2000), "Situación política de Colombia", *Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe*, 3, pp. 55 – 64.
- Leal Buitrago, F. (2004), "Armed Actors in the Colombian Conflict", en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Zed Books, Londres, pp. 126 – 147.
- Loveman, B. (1999), *Por La Patria. Politics and the Armed Forces in Latin America*, Scholarly Resources Inc., Wilmington, Delaware.
- Maler, S. J. (2002), "Las migraciones y la problemática transnacional: tendencias recientes y perspectivas para 2020", en K. Bodemer, E. Gamarra (eds.), *Centroamérica 2020. Un nuevo modelo de desarrollo regional*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, pp. 160 – 196.
- Matos Mar, J. (1984), *Desborde popular y crisis del estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Matos Mar, J. (2004), *Desborde popular y crisis del estado. Veinte años después*, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima.
- McSherry, J. P. (1997), *Incomplete Transition. Military Power and Democracy in Argentina*, MacMillan, Houndmills.
- Millett, R. (1977), *Guardians of the Dynasty. A History of the U.S. Created Guardia Nacional of Nicaragua and the Somoza Family*, Orbis Books, Maryknoll, N. Y.
- McIlwaine, C., C. Moser (2001), "Violence and social capital in urban poor communities: perspectives from Colombia and Guatemala", *Journal of International Development*, XIII, 7, pp. 965-984.
- McIlwaine, C., C. Moser (2004), "Drugs, alcohol and community tolerance: an urban ethnography from Colombia and Guatemala", *Environment and Urbanization*, XVI, 2, pp. 49-62.
- McIlwaine, C., C. Moser (2006), "Living in fear: how the urban poor perceive violence, insecurity and fear", en K. Koonings, D. Kruijt (eds.), *Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America*, Zed Books, Londres (por publicarse).
- Moser, C. (2004), "Urban violence and insecurity: an introductory roadmap", *Environment and Urbanization*, XVI, 2, pp. 3-16.
- Moser, C., C. McIlwaine (1999), "Participatory urban appraisal and its application for research on violence", *Environment and Urbanization*, XI, 2, pp. 203-226.
- Moser, C., C. McIlwaine (2004), *Encounters with Violence in Latin America. Urban Poor Conceptions from Colombia and Guatemala*, Routledge, Londres.

- Moser, C., D. Rodgers (2005), *Change, Violence and Insecurity in Non-Conflict Situations*, Overseas Development Institute, Londres.
- O'Donnell, G. (2003), "Acerca de las problemáticas fronteras de América Latina", en G. O'Donnell, C. Hewitt de Alcántara, A. Escobar, *Cruzando fronteras en América Latina*, CEDLA (Cuadernos del CEDLA, 16), Amsterdam pp. 7 – 18.
- Olmo, R. de et al (2000), "Inseguridad, violencia y miedo en América Latina", número especial de *Nueva Sociedad*, 167, mayo – junio.
- OIT (2004), *Panorama laboral 2004*, Organización Internacional de Trabajo – Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima.
- Perlman, J. (1976), *The Myth of Marginality. Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro*, University of California Press, Berkeley.
- Perlman, J. (2005), "The Myth of Marginality Revisited. The Case of Favelas in Rio de Janeiro 1969-2003", Manuscrito no publicado, 24 marzo.
- Pérez Brignoli, H. (1993), *De la posguerra a la crisis (Tomo V de la Historia general de Centroamérica (1945 – 1979))*, Sociedad Estatal Quinto Centenario / FLACSO, Madrid y San José.
- Pérez Sáinz, J. P. (2004), "La pobreza urbana en América central: Evidencias e interrogantes de la década de los 90", en S. H. Davis, E. Gacitúa, C. Sojo (eds.), *Desafíos del desarrollo social en Centroamérica*, FLACSO / Banco Mundial, San José y Washington, pp. 63 – 103.
- PNUD (2003), *El conflicto, callejón con salida. Informe nacional de desarrollo humano*, Editorial El Malpensante, Bogotá.
- PNUD (2004), *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay*, www.democracia.UNDP.org, abril (versión electrónica).
- Portes, A. (1989), "Latin American urbanization during the years of the crisis", *Latin American Research Review*, XXIV, 3, pp. 7 – 43.
- Rojas Aravena, F. (ed.) (2003), *La seguridad en América Latina pos 11 de septiembre*, Nueva Sociedad, Caracas.
- Rojas Aravena, F., B. Arévalo de León, C. Sojo (1998), *Sociedad, estado y fuerzas armadas. La nueva agenda de seguridad en Centroamérica*, FLACSO, Guatemala y Santiago de Chile.
- Rosada-Granados, H. (1998), *El lado oculto de las negociaciones de la paz. Transición de la guerra a la paz en Guatemala*, Fundación Friedrich Ebert - Proyecto Nacional (Materiales de estudio y trabajo, 23), Guatemala.
- Rotker, S. en colaboración con K. Goldman, J. Balán (eds.) (2002), *Citizens of Fear. Urban Violence in Latin America*, Rutgers University Press, New Brunswick.
- Saín, M. (2002), *Seguridad, Democracia y Reforma del Sistema Policial en la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Saín, M. F. (2003), "Los desafíos de la inteligencia regional en un contexto de globalización", Paper presented at the 3th Simposio Internacional sobre Seguridad y Defensa 'Nuevas tendencias de la seguridad subregional', ponencia presentada en el Hemispheric Center for Defense Studies (CHDS) de Chile, Santiago de Chile, 14-17 de abril.
- Savenije, W., K. Andrade-Eekhoff (2003), *Conviviendo en la orilla. Violencia y exclusión social en el Área Metropolitana de San Salvador*, FLACSO, San Salvador.
- Savenije, W. (2004), "La mara Salvatrucha y el Barrio 18 St.", *Foreign Affairs en Español*, 4 (2), abril – junio, pp. 28 – 46.

- Sieder, R., M. Thomas, G. Vickers, J. Spence (2002), *Who Governs? Guatemala Five Years After the Peace Accords*, Hemispheric Initiatives & Washington Office on Latin America (WOLA), Cambridge, Mass.
- Silva, P. (ed.) (2001), *The Soldier and the State in South America. Essays in Civil-Military Relations*, Palgrave, Basingstoke.
- Solares, J. (1992), "Guatemala: Etnicidad y democracia en tierra arrasada", en G. Aguilera et al, *Los problemas de la democracia*, FLACSO, Guatemala, pp. 47-72.
- Torres-Rivas, E. (1993), *Historia inmediata (Tomo VI de la Historia general de Centroamérica (1979 - 1991))*, Sociedad Estatal Quinto Centenario / FLACSO, Madrid y San José.
- Vellinga, M. (2004), "The Political Economy of the Drug Industry: Its Structure and Functioning", en M. Vellinga (ed.), *The Political Economy of the Drug Industry. Latin America and the International System*, University Press of Florida, Gainesville, pp. 3 – 22.
- Ventura, Z. (2002), *Cidade partida*, Editora Companhia das Letras, (primera edición en 1994), Rio de Janeiro.
- Walter, K., *El régimen de Anastasio Somoza, 1936 – 1956*, Universidad Centroamericana (UCA) – Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), Managua.
- Walton, J. (1976), "Guadalajara: Creating the divided city", en W. Cornelius, R. U. Kemper (eds.), *Metropolitan Problems and Governmental Responses in Latin America*, Sage, Beverly Hills.
- Walton, J. (1977), *Elites and Economic Development. Comparative Studies in the Political Economy of Latin American Cities*, The University of Texas Press, Austin.
- Zaluar, A. (1994), *Condomínio do diabo*, Editora da UFRJ, Rio de Janeiro.
- Zaluar, A. (2000), "Perverse Integration: Drug Trafficking and Youth in the Favelas of Rio de Janeiro", *Journal of International Affairs*, 53, 2, pp. 654-671.
- Zaluar, A. (2001), "Violence in Rio de Janeiro: Styles of Leisure, Drug Use, and Trafficking", *International Social Science Journal*, 3, pp. 369-379.
- Zaverucha, J. (2005), *FHC, forças armadas y polícia. Entre o autoritarismo e a democracia, 1999 > 2002*, Editorial Record, Rio de Janeiro.

Últimos títulos publicados

WORKING PAPERS

- WP 04/06 Kruijt, Dirk: *América Latina. Democracia, pobreza y violencia: Viejos y nuevos actores.*
- WP 03/06 Donoso, Vicente; Martín, Víctor: *Exportaciones y crecimiento en España (1980-2004): Coin-tegración y simulación de Montecarlo.*
- WP 02/06 García Sánchez, Antonio; Molero, José: *Innovación en servicios en la UE: Una aproximación a la densidad de innovación y la importancia económica de los innovadores a partir de los datos agregados de la CIS3.*
- WP 01/06 Briscoe, Ivan: *Debt crises, political change and the state in the developing world.*
- WP 06/05 Palazuelos, Enrique: *Fases del crecimiento económico de los países de la Unión Europea-15.*
- WP 05/05 Leyra, Begoña: *Trabajo infantil femenino: Las niñas en las calles de la Ciudad de México.*
- WP 04/05 Álvarez, Isabel; Fonfría, Antonio; Marín Raquel: *The role of networking in the competitive-ness profile of Spanish firms.*
- WP 03/05 Kausch, Kristina; Barreñada, Isaías: *Alliance of Civilizations. International Security and Cos-mopolitan Democracy.*
- WP 02/05 Sastre, Luis: *An alternative model for the trade balance of countries with open economies: the Spanish case.*
- WP 01/05 Díaz de la Guardia, Carlos; Molero, José; Valadez, Patricia: *International competitiveness in services in some European countries: Basic facts and a preliminary attempt of interpretation.*
- WP 03/04 Angulo, Gloria: *La opinión pública española y la ayuda al desarrollo.*
- WP 02/04 Freres, Christian; Mold, Andrew: *European Union trade policy and the poor. Towards im-proving the poverty impact of the GSP in Latin America.*
- WP 01/04 Álvarez, Isabel; Molero, José: *Technology and the generation of international knowledge spil-lovers. An application to Spanish manufacturing firms.*

POLICY PAPERS

- PP 02/06 Ruiz Sandoval, Erika: *Latinoamericanos con destino a Europa: Migración, remesas y codesa-rollo como temas emergentes en la relación UE-AL.*
- PP 01/06 Freres, Christian; Sanahuja, José Antonio: *Hacia una nueva estrategia en las relaciones Unión Europea – América Latina.*
- PP 04/05 Manalo, Rosario; Reyes, Melanie: *The MDGs: Boon or bane for gender equality and women's rights?*
- PP 03/05 Fernández, Rafael: *Irlanda y Finlandia: dos modelos de especialización en tecnologías avan-zadas.*
- PP 02/05 Alonso, José Antonio; Garcimartín, Carlos: *Apertura comercial y estrategia de desarrollo.*
- PP 01/05 Lorente, Maite: *Diálogos entre culturas: una reflexión sobre feminismo, género, desarrollo y mujeres indígenas kichwuas.*
- PP 02/04 Álvarez, Isabel: *La política europea de I+D: Situación actual y perspectivas.*
- PP 01/04 Alonso, José Antonio; Lozano, Liliana; Prialé, María Ángela: *La cooperación cultural españo-la: Más allá de la promoción exterior.*

